[La Marea] El comercio exterior no suele ser un tema que destaque en los programas electorales. Sin embargo, de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo algunos partidos ecologistas y de izquierdas centran buena parte de su campaña en las actuales negociaciones entre la Unión Europea y EEUU para conseguir un gran acuerdo de libre comercio, llamado Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP en sus siglas en inglés). La eliminación de aranceles y trabas como regulaciones y normas aumentaría el tráfico de bienes y servicios entre los dos principales bloques económicos del mundo, que engloba a 820 millones de consumidores, según argumentan los promotores del tratado. El número creciente de críticos, no obstante, teme que los negociadores acabarán aceptando el denominador común más bajo que rige la actividad económica a ambos lados del Atlántico. Grupos medioambientales alertan sobre cómo los logros en normas y estándares ecológicos, por ejemplo en la producción agrícola en Europa, se diluirán en beneficio de las grandes empresas alimentarias de EEUU.

El Parlamento Europeo es la única institución elegida por la ciudadanía que podría poner freno al TTIP. Con el Tratado de Lisboa firmado en 2007, la Cámara de Estrasburgo ha ganado el poder de vetar asuntos relacionados con el comercio exterior de la UE. Cualquier acuerdo con Washington, por ende, necesitará la aprobación de los eurodiputados que saldrán elegidos el 25-M. En el pasado, la Eurocámara era un tigre sin dientes, pero recientemente ha mostrado sus garras a los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, por ejemplo, al tumbar el acuerdo internacional contra la piratería (ACTA) o cuando votó a favor de suspender el intercambio de datos bancarios con EEUU (Swift) a raíz del malestar por el espionaje de la agencia norteamericana NSA.

Lo que ha reforzado las sospechas acerca del TTIP es la opacidad con la que se conducen las negociaciones que comenzaron hace dos años. El secretismo absoluto ha alertado a varias ONG, sindicatos y asociaciones civiles, tanto en Europa como en EEUU. El Corporate Europe Observatory (una ONG con base en Bruselas que vigila los abusos de influencia de los lobbies industriales) lleva un año reclamando legítimamente (acogiéndose al reglamento 1049/2001 que da derecho a acceder a documentos relacionados con tratados de la UE) más transparencia sobre el contenido del Tratado y la identidad de los negociadores. En vano. Lo único que se ha podido conseguir al respecto proviene de documentos wiki-filtrados por europarlamentarios indignados por lo poco que se llega a conocer de las rondas negociadoras. “El TTIP amenaza con quitar los medios democráticos para la gestión social y medioambiental del mercado interno”, opina el ecologista alemán Sven Giegold.

Los pocos documentos que han sido filtrados destapan que el acuerdo prevé una desregulación a todos los niveles, y no precisamente en pos de la calidad. El economista francés Jacques Sapir denuncia en su blog que el tratado transatlántico “impone que nuestras normas sociales y sanitarias se alineen sobre las de EEUU”. Lo confirmó también la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento francés en un informe de 2013 sobre el TTIP: “El objetivo declarado por el Farm Bureau [el lobby de los grandes productores agrícolas de EEUU] es aumentar los flujos de comercio agrícola de Estados Unidos hacia Europa. Esto requeriría llegar a un acuerdo SPS plus [reglamentos en materia sanitaria y fitosanitaria que se basan en

el uso de normas científicas] muy agresivo por parte de los americanos que pedirían que se suprimieran las restricciones europeas sobre carnes tratadas con hormonas de crecimiento (ractopamine), sobre los tratamientos antimicrobianos o de reducción de agentes patógenos (ácido, lejía), la ausencia de etiquetaje específico para productos que contienen transgénicos y la reducción de los plazos de autorización para introducir soja transgénica en el mercado europeo de la alimentación humana y animal”.

Cláusulas para proteger al inversor

Además de la posible llegada generalizada de transgénicos o tratamientos hormonales, los ecologistas y el partido verde europeo temen sobre todo un aspecto muy controvertido del tratado: el llamado Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Se trata de cláusulas que permiten a un inversor privado llevar a las autoridades de un Estado soberano ante un tribunal de arbitraje internacional si considera que una nueva ley perjudica sus intereses económicos en el país en cuestión. Así, por ejemplo, en 2013, la empresa americana Lone Pine Resources demandó al gobierno de la provincia canadiense de Québec por haber aprobado una moratoria para el fracking, la controvertida práctica de extraer gas de esquisto del subsuelo con la inyección de agua y químicos. “Se va a trasladar el poder de decidir de las normas corporativas de las jurisdicciones oficiales hacia grupos de arbitraje privados que no tienen nada que ver con la justicia. No habrá posibilidad de recurrir puesto que las decisiones de estos arbitrajes serán definitivas y apremiantes”, señala el economista belga Raoul-Marc Jennar.

Según un informe reciente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), los casos de litigios ligados a la cláusula ISDS, que se ha incluido en un sinnúmero de tratados bilaterales, se duplicaron entre 2002 y 2013. En algunos países, notablemente en Francia y Alemania, se oponen a esta cláusula. Por ello, la Comisión Europea ha decidido excluir, por ahora, el ISDS de las negociaciones sobre el TTIP y dejar el tema para más adelante.

Los promotores y defensores de este gran espacio económico sin trabas fronterizas destacan los efectos para la economía y el empleo. Según un informe de la Comisión Europea, el TTIP aumentaría el crecimiento en la UE en un 0,48% anual del Producto Interior Bruto y un 0,38% en EEUU hasta el año 2027. “¡Un incremento deseado del 0,5% del PIB y la creación de entre 300.000 y 500.000 puestos de empleo en 13 años, cuando hay actualmente en Europa 26,5 millones de parados!”, ironiza el economista Jennar. Partidarios del TTIP, como el francés Vincent Champain, economista y miembro de la Cámara de Comercio Franco-Americana, responden con este planteamiento: “Hasta en las hipótesis más pesimistas, hay algo de crecimiento. La pregunta que hay que hacerse es si se está mejor con o sin el Tratado”.

Para Aurélie Trouvé, economista y copresidenta del comité científico de ATTAC Francia, la respuesta es no. Basa su argumento en la experiencia de acuerdos similares como el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Según un estudio del Economic Policy Institute (una ONG americana para la defensa de los trabajadores con salarios bajos-medios), 20 años después de su lanzamiento, NAFTA no ha creado los 170.000 empleos al año que se habían prometido. En su lugar, ha contribuido a generar un enorme déficit

comercial con México y Canadá y la pérdida de puestos de trabajo en EEUU. Es más, en vez de reforzar las alianzas, NAFTA ha aumentado los conflictos comerciales entre los tres países. “Estos acuerdos bilaterales son una nueva vía de desregulación de los mercados. A los países del sur que habían conseguido rechazar la liberalización salvaje de los mercados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se la vuelven a servir mediante estos acuerdos bilaterales de libre comercio. Temen lo que ha pronosticado José Manuel Barroso, el actual presidente de la Comisión Europea: que el TTIP se contagie como modelo al resto del mundo”, opina la economista Trouvé de ATTAC.

Reunión con empresarios en Madrid

En marzo tuvo lugar en Madrid una reunión de empresarios españoles con los equipos de negociadores de ambas partes para ponerles al día sobre algunos detalles. El jefe de la delegación de la Comisión Europea, el español Ignacio García Bercero, y su colega estadounidense, Dan Mullaney, se emplearon a fondo para resaltar las ventajas de una gran área de libre comercio para las empresas de ambos bloques. Pero los beneficios van más allá, según García Bercero: “Si EEUU y la UE quieren seguir desempeñando su papel de líderes que dictan las normas del comercio internacional, habrá que establecer una cooperación y un diálogo más fuerte y eficaz que los que hemos desarrollado hasta ahora”.

El Gobierno de España es uno de los partidarios incondicionales del tratado comercial con EEUU. Lo confirma la designación del titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, como cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones europeas de mayo. Los ecologistas critican que el ministro somete el medio ambiente a los intereses de la industria. “Durante su mandato, Miguel Arias Cañete se ha dedicado en nuestro país a lo que nosotros llamamos una contrarreforma medioambiental”, afirma Juan López de Uralde, coportavoz de Equo. “Ha desmantelado la ley de Costas y ha abierto la de impacto medioambiental para autorizar el fracking. También tiene una responsabilidad directa en que España se haya convertido en la puerta de entrada de los transgénicos en Europa. Su política defiende los intereses de las multinacionales agroalimentarias y del sector de la agricultura industrial”, subraya el dirigente del partido ecosocialista.

Las negociaciones del TTIP se han complicado últimamente y hay síntomas de fatiga en ambos lados. La cumbre entre la UE y EEUU, en marzo en Bruselas, a la que asistió el presidente Barack Obama, no dio ningún impulso al proyecto, según los medios europeos. Pero los opositores al TTIP no se confían. Durante la campaña para el 25-M habrá muchas movilizaciones y campañas de información en todo el continente: “Todo dependerá de la movilización ciudadana que está creciendo en Europa y en los Estados Unidos”, opina Trouvé, de ATTAC, y recuerda que otro tratado, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), fracasó por el rechazo masivo de la sociedad civil mexicana en 2005. En Francia, las regiones de Île de France, PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul) y la ciudad de Besançon ya se han declarado preventivamente como regiones “fuera del TTIP”.